

## LAS NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS: ¿PROGRESO O MARKETING?

(Publicado en el periódico de Valencia *Las Provincias* el 27-Feb-04, págs. 37 y 39)

José A. de Azcárraga (\*)

En las últimas dos décadas ha crecido extraordinariamente en España el número de universidades (hay ya cerca de *setenta*), y muchas se han dedicado con entusiasmo a la creación de nuevas carreras. Con frecuencia la “nueva” oferta es, pura y simplemente, repetición en una Escuela o Facultad de lo que ya se ofrecía en otra, quizá con algún matiz diferenciador. Las universidades de la Comunidad Valenciana no son una excepción, y en estos momentos hay carreras que se pueden cursar en muchos de sus centros; de hecho, en demasiados. Por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas se puede cursar en seis centros públicos (más cinco privados), y también asociada a Derecho (dos licenciaturas estudiando una y media); hay también estudios semejantes pese a las diferencias de nombre, etc. Se afirma que la múltiple oferta favorece la competencia y las posibilidades de elección del alumnado y, también, que las nuevas carreras satisfacen una *demanda social*. Se diría que la Comunidad Valenciana, a juzgar por su oferta académica, sus cinco universidades públicas y sus múltiples sedes, es casi tan rica como el Estado de California que, con un PIB cincuenta veces mayor y treinta y seis millones de habitantes (sería la séptima potencia económica *mundial*), tiene un sistema público con *sólo* treinta y tres universidades.

Superficialmente, ambos argumentos –libre competencia y demanda social- son sólidos: los efectos benéficos de la primera en la calidad de la oferta parecen lógicos, y es obvio que los dirigentes políticos –responsables del *placet* final a los nuevos centros docentes- están, precisamente, para atender las necesidades sociales. Sin embargo, un análisis menos superficial muestra que los dos carecen de base firme. Para empezar, la pura competencia no es aplicable, sin más, a un *servicio público* como la universidad, que debe regirse, sobre todo, por criterios de servicio y rentabilidad *social*. Por ello, la creación de nuevas enseñanzas y centros públicos requiere, primero, estudiar si satisfacen una necesidad *aún no atendida* y, después, analizar la repercusión - económica, docente y científica- que conllevaría su posible implantación a medio y largo plazo (el *Master* del *St. John's College* de Cambridge me explicó en una ocasión cómo planificaban allí a un *siglo* vista). Inevitablemente, su creación compromete recursos que podrían destinarse a mejorar lo ya existente, que dista de ser perfecto. Por ejemplo, puede ser mejor tener sólo un determinado laboratorio, pero excelente y de referencia, que varios mal dotados repartidos en otros tantos centros: la bondad de la múltiple oferta no es automática.

Igualmente, es preferible tener menos universidades y que alguna sea muy buena, que muchas y de menor calidad. Y no es posible medir esa calidad sin criterios *externos* fiables, que hasta ahora no han existido: las evaluaciones *oficiales* de los centros universitarios españoles merecen escaso crédito por su autocomplacencia. Pero la realidad es tozuda: en una reciente clasificación internacional (realizada, curiosamente, por una universidad de Shangai), sólo la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid figuran entre las *cien* mejores universidades europeas, siendo las tres mejores Cambridge, Oxford y el Imperial College de Londres. Según ese mismo estudio, las primeras del mundo son Harvard, Stanford, Caltech, Berkeley, Cambridge, MIT, Princeton, Yale y Oxford, todas norteamericanas (y no todas públicas) salvo las inglesas de Cambridge y Oxford. Pueden -y deben- discutirse detalles y matices, pero

nadie que conozca el mundo universitario y de la investigación se sorprenderá mucho al leer esta lista.

Si la dispersión de recursos perjudica la calidad, sólo resta el segundo criterio para crear nuevos centros y enseñanzas: la *demanda social*, a la que se apela –me parece– con frecuente ligereza. La sociedad se supone aquí representada por el sector productivo, cultural, estudiantil y, por supuesto, por los propios centros universitarios. El problema surge cuando éstos contemplan las nuevas enseñanzas como captadoras de alumnos (un *bien* cada vez más escaso) y generadoras de necesidades docentes y administrativas, es decir, como polos de *su propio* desarrollo. De este modo los centros pueden aludir a una pretendida demanda social para justificar sus propias necesidades, por supuesto legítimas, pero que no son las de la sociedad. La excesiva proliferación de asignaturas en los últimos planes de estudios –por ejemplo– es prueba fehaciente de lo que señalo. Algo análogo puede suceder con las propias universidades si sólo obtienen mayores recursos cuando crean nuevos centros y estudios. El resultado es que, igual que se da la *ingeniería financiera* en la contabilidad empresarial, ha existido una *ingeniería académica*, no menos *creativa*, en lo que concierne a la terminología docente y a las nuevas enseñanzas. Estudios que antes sólo se impartían en la UV se cursan ahora también, en extraña competencia, en la UPV y viceversa, pese a que los centros de ambas instituciones están en la misma avenida o separados por tres cuartos de hora de tranvía. El resultado es una oferta tan excesiva como confusa que, además, introduce problemas nuevos, pues ¿son realmente equivalentes todas las carreras de igual nombre? ¿tienen el mismo reconocimiento todos los títulos de igual tipo? (la respuesta es negativa, algo que ignoran muchos estudiantes al matricularse). Por otra parte, ¿cuál es el futuro de centros con muy pocos alumnos porque sus estudios se imparten también en otros lugares? El resultado de la disminución de la población estudiantil –nada sorprendente, por cierto, dada la bajísima natalidad de los ochenta– es un aspecto más, me parece, de la falta de previsión y del uso inadecuado de los recursos públicos en las últimas décadas.

Cuando se prescinde del anterior análisis, la creación de nuevos estudios y centros *parece* atender necesidades sociales. Pero muchas de ellas (“mi facultad, en mi ciudad”, etc.) son ficticias y sólo reflejan desinformación. La sociedad no es culpable de padecerla: los debates sobre calidad de la enseñanza suelen producir acaloradas descalificaciones y escasos razonamientos, y no hay campaña electoral que se precie que no incluya la promesa de más centros universitarios, cuya bondad ni se cuestiona. Pero, ¿por qué “más centros y más cerca” ha de ser preferible a “menos, pero mejores y con beca para desplazarse”? Lo segundo no sólo es mucho mejor: también es *menos* costoso. Sin embargo, los medios de comunicación recogen con más entusiasmo que análisis la creación, *políticamente correcta*, de nuevas enseñanzas y centros, y nadie parece preguntarse si los presupuestos requeridos (para nuevos edificios, laboratorios, bibliotecas, gestión, etc.) podrían haberse empleado mejor potenciando lo mucho que ya había, o –también– mejorando y haciendo socialmente más atractiva la *formación profesional*. Es ésta la eterna asignatura pendiente de nuestro sistema educativo, que debería acoger –no nos engañemos– a un sector no desdeñable del estudiantado, hoy frustrado y *aparcado*, en vía muerta, en las universidades. De una más dignificada y extendida formación profesional sí hay, estoy seguro, una gran necesidad, más rentable socialmente que duplicar enseñanzas universitarias, aunque políticamente pueda dar menos réditos.

Por otra parte, no sólo es importante la docencia. ¿Acaso no es esencial la investigación, básica y aplicada, como generadora de nuevos conocimientos y dinamizadora de la economía? ¿Se favorece esa investigación dispersando los pocos

medios existentes? ¿Es preciso que *todas* las universidades ofrezcan casi todos los estudios, *postgrado* y doctorado incluidos? ¿Por qué son justamente famosas en todo el mundo Berkeley o Cambridge? Ya no sorprende que algunos estudiantes Erasmus, tras un año en una universidad extranjera, prefieran acabar su carrera o hacer un doctorado en ella. Quien puede comparar, juzga a nuestras universidades con menor benevolencia aunque, justo es decirlo, han progresado espectacularmente en el último cuarto de siglo. Pero esto ha sido consecuencia, *sobre todo*, del mayor esfuerzo *de la sociedad*, reflejado en los mayores presupuestos de las universidades, y del trabajo de sus científicos. Con recursos mucho mayores que hace veinticinco años, aunque sean aún insuficientes, sería *imposible* no haber mejorado.

Es necesaria una urgente racionalización de la oferta y del *mapa* universitario. No será cosa fácil, dados los intereses creados, la desinformación y el *marketing* que inspiró parte de esa oferta, pero debe hacerse. De hecho, el cambio -¿otro más? se preguntará el sufrido estudiante- está próximo. La creación del *espacio europeo de enseñanza superior* obligará a adaptar nuestro sistema universitario, incluyendo sus títulos y la duración de sus estudios, a la nueva configuración común europea. Es una suerte que, de vez en cuando, ser europeos nos obligue –confiemos en ello- a mejorar. Pero esa esperanza podría frustrarse si se planificara la reforma con el mismo espíritu que condujo a la situación actual<sup>1</sup>. Se necesita una visión distinta, con un horizonte a medio siglo, que deje de una vez atrás el viejo dicho del sobrino del Gatopardo, *se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi*. Basta ya de cambiar todo – aparentemente- para que todo siga igual.

(\*) *Catedrático y claustral de la Universitat de València*; <http://www.uv.es/~azcarrag>

---

<sup>1</sup> **Adición (2012):** Así ha sido. La inexplicable implantación de la ‘versión española’ del *Plan Bolonia*, que ha adoptado el sistema de 4 años (grado) + 1 año (máster) en lugar de la estructura 3 (grado) + 2 (máster) que, de hecho, ya tenían los dos ciclos de las antiguas licenciaturas y que ha sido la adoptada por nuestro entorno europeo, nos ha alejado de éste y, por el momento, ha traído muchas más complicaciones que ventajas.